



RESUMEN Y PROSPECTIVA

- **Crisis de violencia se extiende en Chiapas; aumenta la violencia política, los secuestros y las extorsiones.** (p. 3). El pasado 10 de octubre se registró el secuestro de más de 60 ejidatarios de Altamirano, Chiapas, después de que se reunieran en Tuxtla Gutiérrez con autoridades y legisladores estatales en el marco de un conflicto político entre un síndico concejal del municipio y la facción liderada por un exalcalde. Este evento no es el primero que da cuenta de la utilización de la violencia en este municipio (y el estado en general) para las pugnas políticas. Anticipamos que eventos como este continuarán ocurriendo en la medida en la que distintos intereses se contrapongan, y más aún con la llegada de nuevos actores como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que protagonizan una cruenta lucha en todo el estado, lo que ha acelerado la vulneración de la gobernabilidad política y la estabilidad social.
- **Uso político de policías en Nuevo León reducirá confianza y percepción de desempeño, y podría detonar un aumento en la incidencia delictiva.** (p. 5). El 07 de octubre, elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza cercaron los accesos a su cuartel central para evitar que la Fuerza Civil estatal tomara el control de la policía. Este incidente ocurre en un contexto de tensiones en ascenso entre el gobernador Samuel García y miembros del PAN y PRI que inició hace unos meses, y en el que se han utilizado medidas administrativas para amedrentar a sus opositores. Lo más probable es que estos incidentes gradualmente impacten la confianza y percepción de desempeño de las corporaciones policiales estatales y municipales e, inclusive, podría generar espacios para el aumento del crimen y de la violencia en el estado (especialmente grave en un contexto de disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste en la zona metropolitana de Monterrey).
- **Ejecución extrajudicial de migrantes por parte de militares genera incertidumbre de operativos fronterizos en Chihuahua** (p. 7). El pasado 7 de octubre, un grupo de migrantes que se trasladaba en la región fronteriza entre Ciudad Juárez y Santa Teresa fue atacado a tiros por elementos de la SEDENA, según informó este lunes la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. En el evento murieron dos personas y resultaron heridos otros cuatro, en su mayoría guatemaltecos (un hondureño). Sin mayores avances en la investigación, los elementos militares dispararon en el momento en que la camioneta de migrantes no se detuvo cuando se les ordenó. Resulta relevante la declaración de la

FGE que, en semanas recientes, ha intensificado su estrategia de atención de la violencia sufrida por migrantes, en este caso acusando directamente a elementos militares de una ejecución extrajudicial. Sin embargo, Chihuahua continuará registrando una crisis aguda de migrantes en la región de Juárez. Destacamos que Chihuahua es la quinta entidad con mayores crímenes de autoridades federales y estatales de lesa humanidad.

- **Cártel de Sinaloa lanza propaganda anti-fentanilo y desarrolla nuevas estrategias de venta en redes sociales en Estados Unidos.** (p. 9). Esta semana registramos un incremento en la aparición de narcomensajes en los que Los Guzmán del Cártel de Sinaloa y sus aliados en Sonora, Sinaloa y Baja California han prohibido la producción y venta del fentanilo. Ante las amenazas de extradición y de desmantelamiento de Estados Unidos contra Los Chapitos, los líderes de la mafia impulsan una campaña de comunicación para deslindarse del fentanilo y culpar a otras organizaciones criminales. No obstante, la probabilidad de que renuncien a las millonarias ganancias del opioide es mínima. Los Guzmán continuarán intentando monopolizar la producción de fentanilo e innovar en el uso de tecnologías, como el uso de redes sociales (WhatsApp, Instagram, SnapChat, TikTok), para burlar los mecanismos tradicionales de seguridad fronteriza en Estados Unidos y continuar su trasiego a Texas, California y Nuevo México.
- **Detención de grupo de delincuentes colombianos confirma que el uso de drones artillados para atacar a población y objetivos policiales forma parte del arsenal del crimen organizado en Michoacán.** (p. 11). El pasado domingo 8 de octubre fue aprehendida una banda delincuencial en el municipio de Buenavista, presuntamente dedicada a la preparación de drones con explosivos. En la detención no se dan detalles del supuesto taller, exclusivamente se decomisaron armas y explosivos. Por la reacción inmediata de bloqueos a carreteras y comunidades de la región, se estableció la vinculación de esta célula con Los Viagra de los hermanos Sierra Santana. En el fondo de estos sucesos se encuentra la disputa por la extracción de recursos del territorio limonero, la aparición de posibles autodefensas, y el conflicto permanente con el grupo rival del CJNG experto también en el manejo de drones. Esta disputa se mantendrá en las siguientes semanas con el uso creciente de drones, especialmente dirigidos a atemorizar a la población y facilitar las extorsiones.
- **La detención de supuestos líderes de Los Metros en Tamaulipas tiene efectos contrarios a los intentan presentar las autoridades estatales; la actividad criminal no disminuye, y la percepción de inseguridad en la zona fronteriza sigue aumentando.** (p. 14). El 10 de octubre se lograron las capturas de Ulises Raga Ortiz (a) “El M40”, presunto líder de Los Metros en Reynosa, y la de José Cuauhtémoc Valdez González (a) “Jefe Toto”, dedicado al robo de electricidad, en Victoria. En la detención de “El M40” no participaron autoridades federales, y al ser puesto a disposición de la FGR, se dio a conocer que no contaba con orden de aprehensión y sería sólo acusado de portación ilegal de armas. Ese mismo día, se registró un enfrentamiento en Reynosa, donde un elemento de la

Guardia Estatal (GE) falleció y otro fue herido. Autoridades estatales no han establecido si la agresión ocurrió durante la captura de “El M40” o fue una represalia de Los Metros. La falta de información provocó rumores en redes sociales, incluyendo que los dos elementos de la GE habían sido reubicados en Reynosa, por hablar de la corrupción que existe en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Esto desató nuevamente declaraciones sobre la escasez de recursos con la que trabajan los elementos de seguridad, incluyendo falta de gasolina para realizar recorridos de vigilancia. La captura de los presuntos criminales no causó un impacto positivo, al contrario, el ataque a los elementos de la GE provocó temor en la población, y la vaguedad de la información oficial sigue levantando sospechas de que las autoridades estatales están coludidas con criminales. No se espera que estas capturas logren bajar la incidencia delictiva en la entidad, ni en el corto ni en el mediano plazo.

- **El 72.7% de la violencia vinculada al crimen organizado se concentra en 105 municipios. Las entidades con más del 35% de sus municipios ubicados entre los 100 más violentos son Baja California, Colima, Guanajuato y Quintana Roo.** (p. 16). Lantia Intelligence presenta un análisis de los 100 municipios más violentos en lo que va de 2023 (enero a septiembre) con base a las cifras de víctimas letales del crimen organizado. El 72.7% de las víctimas (10,305) se concentra en 105 municipios (98 víctimas por municipio en promedio). En los primeros cinco lugares se encuentran Tijuana (BC) con 1,219 víctimas, Juárez (CHIH) con 768, León (GTO) con 592, Acapulco (GRO) con 362, y Celaya (GTO) con 310. Las siete entidades donde más del 85% de la violencia que han registrado fue en municipios que están dentro de los 100 más violentos son: Baja California, Colima, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, y Jalisco.

ANÁLISIS



Crisis de violencia se extiende en Chiapas; aumenta la violencia política, los secuestros y las extorsiones

VIOLENCIA POLÍTICA

El pasado 10 de octubre fueron plagiados más de 60 ejidatarios en el municipio de Altamirano, Chiapas por un grupo de hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar auto-denominado “14 de agosto”. El incidente ocurrió después de que los ejidatarios viajaran de regreso de Tuxtla Gutiérrez, donde se reunieron con legisladores estatales y autoridades locales en el marco de un conflicto político entre grupos que se oponen o apoyan al síndico concejal Gabriel Montoya. La comitiva de alrededor de 120 ejidatarios viajaba en diferentes camionetas cuando los hombres armados los detuvieron a la altura de la comunidad de Mendoza, en la carretera Chamal-Altamirano y abrieron fuego. Muchos lograron escapar y pedir ayuda a las autoridades, pero más de 60 fueron retenidos, además de que hubo un muerto. El subsecretario de Gobierno del estado, José Cruz Pineda, informó que esta situa-

ción derivaba de un conflicto político, y el 12 de octubre reportó también la liberación de 44 de los secuestrados. Asimismo, el 15 de octubre se logró la liberación de los restantes después de que, durante toda la semana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional resguardaran entradas y salidas de la cabecera del municipio y hubiera diferentes protestas de más de cuatro mil personas (incluyendo miembros de comunidades tojolabales y tzeltales) para exigir la liberación de los ejidatarios.

- En diciembre del 2022 ya había ocurrido un incidente similar en el que ejidatarios de Altamirano encarcelaron precisamente al síndico Gabriel Montoya, acusándolo de no entregar apoyos prometidos.

El conflicto político al que se refería el subsecretario de Gobierno ocurrió entre una facción favorable al síndico concejal, Gabriel Montoya y otra en favor del expresidente municipal del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Pinto Kanter (2019-2021) y su esposa Gabriela Roque Tipacamú, quien también ganó las elecciones en 2021, pero que no se mantuvo en su puesto por protestas, vandalismo y la privación de la libertad de su esposo. A estos personajes se les acusó de caciquismo, pues con la victoria de Gabriela Roque comenzaba la cuarta administración consecutiva de miembros de una misma familia en el municipio.

Aunque el síndico concejal negó tener relación con el grupo paramilitar "14 de agosto", resulta sospechoso que este último participara en las presiones contra el grupo rival hace dos años y que ahora, cuando los ejidatarios exigen la renuncia del personaje y que lo acusan de corrupción, falta de entrega de apoyos y cumplimiento de promesas de obras, así como de malversación de fondos; el grupo paramilitar vuelva a operar de tal manera que lo favorezca.

Este caso da cuenta de la utilización de la violencia y de la vinculación entre grupos políticos y autoridades con grupos armados (que en ocasiones forman parte o están vinculados con organizaciones criminales) para edificar su control y poder político en un municipio o región. Esta situación, como se señaló, no es nueva y es posible que continúe ocurriendo en paralelo con conflictos y crisis políticas durante los próximos meses e incluso años. Altamirano es uno de los municipios donde proliferan grupos de autodefensas.

- Por su parte, Ocosingo, municipio contiguo, está sumergido en una crisis social por las protestas de las comunidades de Frontera Corozal, Nueva Palestina y Santo Domingo (grupos indígenas de choles, lacandones y tzeltales) derivadas de las exigencias de mayor seguridad e intervención de autoridades para hacer frente a las extorsiones, secuestros y cobros de cuotas por actividades por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se encuentra en una guerra abierta a nivel nacional (pero de manera particular y cruenta en Chiapas) con el Cártel de Sinaloa.
- De la misma manera, la crisis de violencia en la región norte del estado, en los municipios de Reforma, Juárez y Pichucalco, contiguos al segundo municipio más violento de Tabasco, Huimanguillo; ha escalado en las semanas recientes (quema de vehículos,

toques de queda y balaceras; además del secuestro y asesinato de encuestadores de morena).

- Precisamente en el municipio de Pichucalco se han registrado secuestros contra plataneros y cobros por actividades. El pasado siete de octubre fueron detenidas cuatro personas por el plagio de ocho plataneros, por los que pidieron un rescate de dos millones de pesos, que, a pesar de ser pagados, no resultaron en la liberación de los plagiados.

El caso de los ejidatarios da cuenta de que el proceso de descomposición de la situación de seguridad y de la paz social está ocurriendo en todo el estado, aunque por razones diferentes. Si bien las oleadas de violencia en Ocosingo y en el norte del estado se explican en mayor medida por los conflictos regionales entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa (además de la presencia de organizaciones criminales de Guatemala y El Salvador, que están involucradas en el tráfico de personas y drogas); la situación en Altamirano se explica más bien por un conflicto entre grupos políticos que representan diferentes intereses sociales. Anticipamos que continuarán aumentando los incidentes de protestas y violencia en todo el estado en lo que resta del 2023, y particularmente en 2024 en el marco de las elecciones, que jugarán un papel importante en las disputas territoriales.



Uso político de policías en Nuevo León reducirá confianza y percepción de desempeño, y podría detonar un aumento en la incidencia delictiva

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

El sábado 07 de octubre, elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, uno de los trece municipios que integran la zona metropolitana de Monterrey, fueron ordenados a replegarse al cuartel central de policía para evitar que la Fuerza Civil estatal asumiera el control de la corporación y la seguridad pública municipal. Durante toda la tarde de ese día, los policías mantuvieron cerrados los accesos con patrullas y vigilaron armados que no se acercara funcionario alguno del Gobierno estatal. Sin embargo, este intento nunca se llevó a cabo y, más adelante, el gobernador Samuel García y el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios, descartaron que en algún momento se hubiera pretendido hacerlo.

- Momentos antes del incidente, el alcalde Daniel Carrillo alertó que le habían informado que la Fuerza Civil intentaría tomar la policía municipal (esta información le habría llegado del director de Seguridad Pública municipal, José Martín Doria Mata).
- Como antecedente, ese mismo día por la madrugada, elementos de la Fuerza Civil estatal se enfrentaron a golpes con funcionarios de verificación del Ayuntamiento y policías municipales para intentar retirar sellos de clausura de la empresa Cryoinfra (clausurada por el Ayuntamiento desde mediados de septiembre por no contar con un plan de contingencia).

Estos dos últimos incidentes ocurren en un contexto de tensiones en ascenso entre el gobernador Samuel García y alcaldes, legisladores y miembros del PAN y del PRI que inició con las reformas constitucionales de los decretos estatales 340, 341 y 342 publicados el 01 de marzo (que limitan las facultades del gobernador; entre éstas, la posibilidad del Congreso de destituir a miembros de su gabinete).

- Desde hace al menos un mes, medios han publicado notas en las que se le acusa al Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Miguel Ángel Flores Serna de hostigar a panistas y priistas con diferentes medidas administrativas (clausuras de sus negocios, cortes de agua, procedimientos fiscales y denuncias penales).
 - Se presume que Flores Serna intenta presionar a los legisladores a cambiar de partido a Movimiento Ciudadano para obtener mayoría en el Congreso local y evitar que se realicen nuevos cambios a la Constitución estatal (o bien, que se realicen otros benéficos para el Ejecutivo).
 - Inclusive, en un mensaje conjunto del 14 de septiembre, Jesús Zambrano, Marko Cortés y Alejandro Moreno acusaron al Gobierno estatal de presionar y chantajear a los miembros de sus partidos y alcanzar mayoría en el Congreso estatal.
 - Asimismo, miembros del PRI acusaron a Flores Serna de tener a su mando a un grupo de elementos de la Fuerza Civil para amedrentarlos. Si bien no hay manera de confirmar estas acusaciones, sí se tienen indicios de que Flores Serna puede desplegar sus elementos fácilmente para defender sus intereses.
- Todo parece apuntar a que el Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza (gobernado por el PAN) decidió devolver los ataques de Flores Serna con las mismas medidas administrativas que él le impuso a los miembros de su partido y del PRI.
 - En este sentido, el 15 de septiembre, el Ayuntamiento clausuró la empresa Cryoinfra. Asimismo, ese mismo día, elementos de la Policía de Tránsito detuvieron un tractocamión de Grupo FGN que transportaba una pipa de Cryoinfra por haber violado el conductor el reglamento de tránsito y por no portar una licencia de conducir. Inmediatamente después, elementos de la Fuerza Civil fueron desplegados e intentaron liberar el tractocamión y la pipa enfrentándose a los policías municipales (parece ser que Flores Serna ordenó su despliegue).
 - Si bien en medios se especuló que Flores Serna es accionista de Cryoinfra, en realidad su familia es propietaria de la empresa transportista Grupo FGN, la que tiene como cliente a Grupo Infra (empresa controladora de Cryoinfra).
 - Es probable que el Ayuntamiento pretenda amedrentar a Grupo Infra para que dé por terminados sus contratos con Grupo FGN a manera de retaliación por los recientes ataques en contra de miembros del PAN y PRI.

Independientemente de los motivos o los incidentes específicos, el uso político de los cuerpos de policía estatales (Fuerza Civil o policías municipales) seguramente causará una dis-

minución en la percepción de desempeño y confianza en los policías e, inclusive, podría ocasionar un repunte de la incidencia delictiva.

- Si bien aún es pronto para afirmar las secuelas, el carácter mediático de estos incidentes seguramente generará fuertes críticas para los cuerpos de policía (en el sentido de que el gobernador y el alcalde de San Nicolás de los Garza utilizan a los policías en rencillas políticas cuando hay un contexto de inseguridad apremiante).
- Por otra parte, es preciso apuntar que el estado de Nuevo León actualmente enfrenta severos riesgos de inseguridad, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey, derivados de la contienda entre miembros del Cártel del Noreste y Cártel de Sinaloa, entre otros, que ha ocasionado un repunte de la violencia reciente. En la medida en que autoridades estatales y municipales orientan sus labores de policía en defender sus intereses, es probable que grupos criminales aprovechen la oportunidad para hacerse de más territorios o mercados ilícitos en perjuicio de los neoleoneses.



Ejecución extrajudicial de migrantes por parte de militares genera incertidumbre sobre operativos fronterizos en Chihuahua

CRISIS MIGRATORIA

El pasado lunes, el titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas informó de un ataque por parte de elementos de la SEDENA en contra de una camioneta que transportaba migrantes en la zona fronteriza de Jerónimo, entre Ciudad Juárez y Santa Teresa, Nuevo México. En el lugar murieron dos migrantes guatemaltecos de nombre Erbis Enrique Barrientos de 27 años y Margarito Canto Juárez de 49. Adicionalmente, resultaron heridos otros tres guatemaltecos y un hondureño. Este anuncio de la FGE de Chihuahua resulta relevante puesto que no es común que las fiscalías den declaraciones de ejecuciones extrajudiciales de otros cuerpos de seguridad como militares. El fiscal indicó que no se encontraron casquillos, además de que los lesionados y fallecidos se localizaron a varios kilómetros del punto en donde recibieron los disparos. Suponemos que esto se debe a una cierta alteración de los hechos por parte de elementos militares, situación que se ha dado en otras ocasiones.

En conferencia de prensa, el fiscal Salas dijo que la SEDENA presentó a un posible elemento como posible participante y que se tenía a otro más como prófugo. Anunció posteriormente que, puesto que se trató de un asunto de competencia federal, se turnaría la investigación a la Fiscalía General de la República. En esta línea, se prevé que la investigación no tenga mayor continuidad; el jueves, cuatro militares presentados por la SEDENA en relación con el ataque fueron puestos en libertad debido a la falta de flagrancia. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil exigieron a las autoridades que se esclarecieran los hechos, como lo hicieron miembros del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción.

Advertimos que la situación de los migrantes en la región de Juárez es de extrema vulnerabilidad, debido no sólo a los volúmenes de paso de personas sino también por la falta de acceso a la justicia. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en lo que va del año se registran alrededor de 175 migrantes que han perdido la vida en el desierto de Juárez, región que acumula el 62% de secuestros de migrantes. Aunque el Instituto Nacional de Migración y la FGE han intensificado labores para intentar contener la crisis de migrantes (acciones de rescate, grupos de trabajo, operativos en centros ferroviarios y carreteros, recursos materiales y remodelación de instalaciones de migrantes) el principal riesgo que sufren estas comunidades es la violencia ejercida por el crimen organizado. A manera de ilustración, en septiembre, la Fiscalía de Chihuahua identificó los cuerpos de nueve migrantes desaparecidos en el municipio de Coyame. La SSP estatal contabiliza que el trasiego de migrantes genera utilidades de 100 millones de pesos mensuales para las bandas criminales.

De esta manera, la crisis de migrantes adquiere una incertidumbre de gestión mayor con la revelación de ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos militares. En este sentido, los grupos de migrantes yacen en una situación compleja donde las autoridades no tienen incentivos para solucionar su situación en el corto plazo. Resulta grave el ataque registrado la semana pasada por elementos militares en un contexto de constante debate nacional de la estrategia de seguridad nacional y del uso de elementos castrenses. Considerados estos actos como de violencia de Estado, la jurisdicción internacional lo cataloga como crimen de lesa humanidad. En esta línea, debemos recordar que la mayoría de estos crímenes se concentran en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y en sexto lugar, Chihuahua.

En primera instancia, la violencia por parte del Ejército genera una incertidumbre de gestión y gobernabilidad relevante en estos territorios de tránsito de migrantes. Cabe recordar que el pasado 18 de mayo se dio un ataque extrajudicial por parte de personal militar de cinco presuntos delincuentes; en un video publicado en medios internacionales, se observó cómo elementos militares ejecutaron a cinco civiles y posteriormente intervinieron en la escena del crimen al sembrarles armas. De modo que no es la primera vez que se observan este tipo de incidentes, que probablemente son más recurrentes de lo que autoridades declaran. En segundo lugar, los procedimientos para investigación en casos de violencia realizada por militares dificultan la posibilidad de que haya una procuración de justicia adecuada. De modo que se prevé que la violencia en contra de migrantes se mantenga en el mediano plazo.



Cártel de Sinaloa lanza propaganda antifentanilo y desarrolla nuevas estrategias para venderlo por redes sociales en Estados Unidos

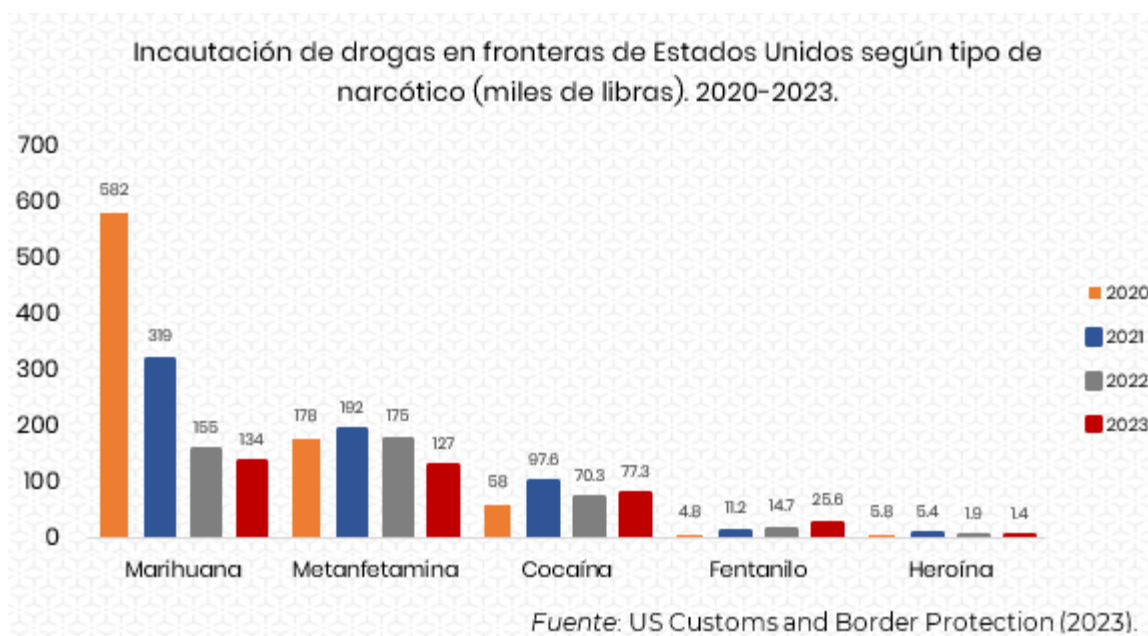
DINÁMICA INTERNACIONAL

En las últimas semanas registramos nueva actividad del Cártel de Sinaloa (CDS) en la frontera norte de México. Desde principios de octubre comenzaron a colocarse narcomantas en distintas ciudades de Sinaloa (Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Ahome) con indicaciones atribuidas a Los Guzmán, la principal facción del CDS encargada de la producción y comercialización de fentanilo en Estados Unidos. En las narcomantas Los Chapitos advirtieron de la estricta prohibición contra la fabricación, transporte, venta y cualquier tipo de negocio que involucre al opioide sintético o a sus precursores químicos. Quien ose desafiar esa directiva y continúe trabajando con la mortal sustancia, advirtieron, se atenderá a las consecuencias de desafiarles. Las mantas también se colocaron en Sonora (Sonoyta y Caborca): el mensaje fue esencialmente el mismo, salvo por el hecho que los presuntos firmantes eran “Los Pelones”, supuesta banda local que trabaja para el CDS, y “Grupo Cazadores”, el brazo armado de Los Guzmán en Sonora. En algunos narcomensajes se añadió un reproche contra los medios de comunicación y contra el gobierno por desinformar, no investigar y no perseguir a los “verdaderos culpables de esa epidemia”. Además, más propaganda antifentanilo fue colocada en Baja California, específicamente en Tijuana y Ensenada. La mafia Cártel de los Arellano Félix (conocido también como Cártel de Tijuana) colocó los mismos mensajes con las mismas instrucciones, lo que indicaría una probable alianza con Los Guzmán en lo concerniente a la nueva política del narcótico.

Las “acciones antifentanilo” impulsadas por Los Guzmán del CDS ocurrieron días después de la celebración del juicio contra Ovidio Guzmán López en la ciudad de Chicago. Las autoridades norteamericanas acusan a Ovidio de crímenes de lavado de dinero y tráfico de drogas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró durante el juicio que el CDS es la organización más violenta y prolífica del mundo, y también la principal responsable del tráfico de la sustancia a su país. Por ello, vaticinó que la captura y extradición de Ovidio no sería la última, refiriéndose a los otros líderes de la mafia que aún están prófugos. En ese sentido la declaración del fiscal fue consecuente con la política elaborada por la DEA. La presión que ejerce el gobierno estadounidense contra Los Guzmán ocurrirá desde ambos lados de la frontera. La semana pasada se celebró en Ciudad de México el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, donde participaron los secretarios de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal Garland junto a sus contrapartes mexicanas. Allí, los funcionarios de Estados Unidos recalcaron que la desarticulación de los cárteles productores de fentanilo es una prioridad porque constituye la principal amenaza a su seguridad nacional. Con la cooperación insistente de EU, México tiene fuertes incentivos para realizar nuevos operativos contra los 23 líderes del CDS que EU ha identificado como prioritarios para romper cada eslabón de la cadena de valor del opioide.

Dadas las presiones existentes, Los Chapitos han optado por impulsar una campaña masiva de propaganda para minimizar su protagonismo en el comercio internacional del fentanilo. La colocación de las narcomantas es una medida desesperada de Los Guzmán para quitarse de encima la presión norteamericana y mexicana; quieren deslindar su imagen de la producción del narcótico y crear la ilusión de que ésta es responsabilidad de otras organizaciones criminales. Los Chapitos, además, quieren dar a entender a las autoridades nacionales y norteamericanas que están dispuestos a renunciar al negocio del fentanilo, si ello les puede salvar de acciones que terminen en su extradición y encarcelamiento en prisiones de alta seguridad en EU. No obstante, es difícil creer que este ejercicio de propaganda en los territorios controlados por Los Guzmán afecte la política de seguridad de Estados Unidos.

El negocio del fentanilo es tremendamente lucrativo. Según la DEA, una dosis de fentanilo de 400 microgramos tiene un precio de mercado en Estados Unidos que ronda en dos dólares. Un kilo de fentanilo puro cuesta de tres mil a cinco mil dólares, pero si éste se rebaja con otros residuos puede obtenerse de 16 a 24 kilos de producto, lo que representa una ganancia aproximada de 1.9 millones de dólares. Además, un kilo de la sustancia puede emplearse para producir hasta 1 millón de pastillas falsificadas de otros narcóticos con ganancias cercanas a los 20 millones de dólares.



Resulta difícil creer que Los Guzmán volverán a la venta de narcóticos tradicionales y renunciarán al comercio de fentanilo; igualmente es difícil pensar que tendrán la capacidad para obligar a otras facciones del CDS, como Los Zambada, a que abandonen el comercio del opiáceo. Los Guzmán no están dispuestos a ceder su participación en el mercado a rivales como el CJNG, pues muy probablemente utilizarían el nuevo flujo de recursos por fentanilo para competirles territorio y mercados en México. Por el contrario, la tendencia de Los Chapitos para hacerse con el monopolio del fentanilo continuará creciendo pese a las presiones

del gobierno de EU. En lugar de abandonar el negocio, advertimos que en los siguientes meses ocurrirá una transformación profunda en las prácticas convencionales para comercializar el opioide sintético en EU. El CDS ha refinado sus métodos para contrabandear fentanilo mediante la implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación. Mediante tácticas de engaño y ofertas de empleo convencen a menores de edad estadounidenses de ciudades como San Diego para traficar fentanilo en la frontera. Con el uso de cuentas falsas en WhatsApp, Facebook, Snapchat e Instagram, las células del CDS burlan la seguridad fronteriza y promocionan las pastillas falsificadas con fentanilo entre los sectores más vulnerables de la sociedad norteamericana. Por ello, pese a los renovados esfuerzos de cooperación bilateral, el tráfico de fentanilo continuará incrementándose en los siguientes meses en los estados vecinos de California, Texas y Nuevo México gracias a la innovación tecnológica del cártel en redes sociales.



Detención de grupo de delincuentes colombianos confirma que drones artillados para atacar a población y objetivos policiales forma parte del arsenal del crimen organizado en Michoacán

DINÁMICA CRIMINAL

Ocho colombianos detenidos por uso de explosivos, que presumiblemente utilizaban para preparar drones artillados, confirman que el crimen organizado sigue invirtiendo recursos y contrata personal especializado para contar con armamento que ha sido empleado en este último mes en esta región de Michoacán para causar terror entre la población (ataques a instalaciones de limoneros, casas y espacios públicos). El uso de los drones con este propósito no es exclusivo de algún grupo criminal en particular, ya que todos tienen acceso a esta tecnología. Llama la atención que en esta región del estado el uso de drones ha estado dirigido principalmente a generar temor entre la población, los reportes de personas fallecidas hasta hoy son mínimos por este tipo de incidentes (otros casos de ataques a población con drones se reportan constantemente en la sierra del estado de Guerrero).

- El estado de Michoacán muestra un alto grado de recurrencia de uso de drones por parte del crimen organizado desde el año 2016 (aun cuando en la frontera norte hay registros de su uso para traficar drogas desde 2012), cuando la policía encontró en un vehículo en la carretera Morelia-Salamanca un dron-bomba con detonador remoto, que puso en alerta a las autoridades respecto a la capacidad de fuego que adquirirían las mafias criminales con el uso de estos vehículos aéreos no tripulados. El uso de los drones ha sido reportado tanto para actividades de vigilancia, transporte de droga, vehículos guía para aviones de carga, extorsión y a últimas fechas generar terror entre la población para desplazarla o someterla.

Las detenciones reportadas se realizaron la mañana del domingo 8 de octubre en la comunidad de Catalinas perteneciente al municipio de Buenavista, y los inculpados no contaban con documentos que acreditaran su estancia regular en el país. Cabe resaltar que no se re-

portó ningún detenido mexicano, y no se han dado a conocer las identidades de las personas colombianas presuntamente involucradas. El reporte policial destaca que les fueron decomisados cuatro artefactos explosivos improvisados para usar en drones, así como una pistola calibre .38 Súper (en fuentes abiertas se señala que bañada en oro), 16 cargadores y mil 40 cartuchos útiles de diferentes calibres de arma de fuego larga. La detención la realizó el Ejército, y las policías federal y estatal, cuando descubrieron y dismantelaron el taller donde se fabricaban los explosivos para los drones. Esta agrupación era considerada un objetivo prioritario para las autoridades ya que lo identificaban como responsable de confeccionar los artefactos explosivos utilizados recientemente. Tanto el arsenal como los individuos aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras la detención, la autoridad reportó bloqueos y quema de vehículos en dos puntos de la carretera Apatzingán-Aguililla: el primero en la comunidad de Catalinas y División del Norte con al menos dos unidades incendiadas, y el segundo en Santa Ana Amatlán, con dos vehículos más en llamas. En total las comunidades de Santa Ana Amatlán, Catalinas y Pinzándaro, en Buenavista, así como San Juan de Los Plátanos, en Apatzingán, fueron incomunicadas por medio de narco bloqueos que le fueron adjudicados a Nicolás Sierra Santana (a) “El Coruco” o “El Gordo Viagra”. Durante estos bloqueos no hubo confrontaciones armadas ni detenciones, debido a que los presuntos criminales huyeron al notar la presencia policial.

En esta zona de Tierra Caliente tiene presencia el grupo de Los Viagra para quienes se presume trabajaba este grupo delincuencia de colombianos. Estos drones han sido usados por 'Los Viagras', liderados por los hermanos Sierra Santana, en ataques realizados apenas en septiembre pasado en La Ruana (comunidad donde en junio pasado asesinaron al activista Hipólito Mora):

- De acuerdo con reportes de seguridad estatales, uno de los primeros ataques durante septiembre, sucedió cuando en La Ruana, municipio de Buenavista, un explosivo se arrojó en la plaza principal, donde Guadalupe Mora, (hermano del asesinado Hipólito Mora) realizaba un discurso en la plaza principal tras un intento de levantamiento en armas de pobladores para expulsar al grupo criminal de Los Viagra. Imágenes muestran a elementos de la Guardia Nacional y civiles, cuando se registra una explosión. Después de este incidente, se reportaron al menos tres días seguidos de ataques similares.
- En la noche 12 de octubre se registran ataques con drones en viviendas y una capilla del poblado de El Alcalde en Apatzingán, por parte de Los Viagra. Las familias tuvieron que pasar la noche en escuelas y en la parte alta de un cerro, ante el temor de que un aparato explosivo los alcanzara. Autoridades locales confirmaron que no se reportan víctimas. Este ataque sucedió tres días después de la detención de los colombianos.
- El domingo 15 de octubre fueron reportados nuevos narco bloqueos sobre la vía Apatzingán a Buenavista, donde siete vehículos fueron utilizados (algunos fueron quemados) en los accesos de las localidades de El Recreo, Chandio, Santa Ana Amatlán, San Juan de Los Plátanos, Catalinas y Pinzándaro, que ya habían sido afectadas hace una semana.

Los Viagra son un grupo del crimen organizado que tiene su base en Michoacán y es conocido por el uso de explosivos contra las autoridades en Aguililla, Apatzingán y Buenavista, además, en fuentes abiertas se señala que forman parte de la organización, Cáteles Unidos. El clan Sierra Santana fundador de Los Viagra se integra con los hermanos Daniel Sierra Santana (a) “El Chaco” y Mariano Sierra Santana (a) “El Negro”, quienes estuvieron presos en diferentes cárceles y fueron liberados en 2020 en medio de un proceso impulsado por el gobierno federal, en beneficio de detenidos no sentenciados. Al segundo se le señala como uno de los fundadores del grupo delictivo Guerreros Unidos, que opera en los estados de Guerrero y Michoacán (Mariano estuvo preso en una cárcel en Guerrero), además de haber participado en el grupo armado “H3”, surgido a raíz de las autodefensas en Michoacán. Una parte del grupo de “Los H3”, se convertiría en el cártel de Los Viagra.

Otros integrantes de Los Viagra son César Sepúlveda Arellano (a) “El Boto” y/o “El Botox”, Eliseo Delgado Calvillo “El Conejo”, y Francisco Manríquez Mendoza, “Pacoco”. El resto del clan Sierra Santana lo componen Rodolfo, Francisco y Nicolás a quien se adjudican las movilizaciones producto de la detención de los colombianos, mientras que otro hermano de ellos, Carlos (a) “La Sopa”, murió en un enfrentamiento con un grupo rival el 5 de marzo de 2017 en Aguililla. Finalmente, Heladio Cisneros Meneras (a) “La Sirena” es señalado como el jefe de plaza de Los Viagras en La Ruana al menos desde 2018, aunque sus actividades criminales pueden rastrearse hasta 2014, cuando fue detenido por primera vez acusado de haber participado en múltiples asesinatos en el municipio de Buenavista, y se le menciona de estar involucrado en el asesinato de Hipólito Mora.

- Dentro de la dinámica criminal de la región de Tierra Caliente en Michoacán destaca que en los primeros días de septiembre comenzaron a circular en redes sociales mensajes firmados por las Fuerzas Especiales Limones (FEL) del CJNG, que parece ser un nuevo brazo armado en Michoacán. Difunden una imagen de identificación: un cráneo que aparece por encima de un limón y un par de armas cruzadas (ya sea rifles o pistolas), todo coronado con una estrella, en alusión a que se financian a través de las extorsiones a los productores y empacadores de limón de la región de Tierra Caliente. En diversos videos de sus patrullajes, señalan que su jefe es Audías Flores Silva (a) “El Jardinero”, quien es originario de Michoacán, y quien ha sido señalado de ser el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Por otro lado, Alejandro Carranza Ramírez (a) “Chito Cano”, es un presunto lugarteniente del “Jardinero” que sería responsable de las incursiones del CJNG en Zacatecas, Michoacán, Guerrero y el Estado de México.
- En Michoacán, desde hace años se ha reportado que el CJNG ha modificado drones para utilizarlos como lanzabombas en contra de sus rivales. En algunos casos, los explosivos caseros son pegados a vasos desechables que sirven como paracaídas para que la caída pueda ser más precisa desde el dron, al cual se le adhiere un gancho que también se maneja vía remota.

Con estos sucesos es previsible que el uso de drones continuará siendo una práctica utilizada por todos los grupos delincuenciales, especialmente porque resulta muy difícil atrapar a sus ejecutores, de ahí la relevancia del hecho reportado. Es preocupante para la sociedad el uso de drones como un arma de terror y extorsión ya que los sistemas de defensa antidrón con que cuenta el ejército mexicano son limitados a cubrir instalaciones estratégicas, y a sus unidades especiales que llegan una vez consumados los delitos. No se conoce que los gobiernos locales estén preparados para esta amenaza. Los esfuerzos por elevar las penalidades por el uso de drones por parte del crimen organizado tendrán efectos limitados dada la impunidad para tipificar el delito (en octubre se aprobó un dictamen de la iniciativa presidencial para castigar hasta con 53 años de prisión el uso criminal de drones). Apenas el 11 de octubre personal de las de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) localizó y desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas en Buenavista, sin embargo, no hubo ningún detenido. El uso intensivo de drones dificulta las operaciones policiales, y brinda información en tiempo real a la delincuencia sobre los movimientos de sus captores.



La detención de supuestos líderes de Los Metros en Tamaulipas ha tenido efectos contrarios a los que presumen las autoridades estatales

DINÁMICA CRIMINAL

El pasado 10 de octubre se logró la detención de Ulises Raga Ortiz (a) “La fayuka” o “El M40” presunto líder de Los Metros en Reynosa, y en la capital estatal la de José Cuauhtémoc Valdez González (a) “Jefe Toto”. La de este último se realizó en un operativo conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Unidad General de Investigación de Tamaulipas, en una vivienda de la colonia Bertha del Avellano, en la que encontraron medidores de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El “Jefe Toto” se dedicaba principalmente al robo de energía eléctrica a través de los llamados “diablitos” que colocaba en los medidores de luz en casas y negocios. Además, contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa por el ataque contra empleados de la CFE y un policía ministerial, el 12 de mayo, cuando estos retiraban los dispositivos ilegales en el fraccionamiento Villa Jardín de la capital del estado.

Mientras, en Reynosa, elementos de la Guardia Estatal (GE) detuvieron a Ulises Raga Ortiz (a) “La fayuka” o “El M40”, presunto líder de Los Metros en la zona. Según fuentes abiertas, las autoridades federales no participaron en este operativo, y que al ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, se dio a conocer que Raga Ortiz no contaba con orden de aprehensión y sólo sería acusado de portación ilegal de armas.

Sin embargo, “El M40” ha sido relacionado como responsable de un ataque armado el 15 de julio en el bulevar Morelos de Reynosa, en contra de policías estatales donde dos agentes murieron y otros dos quedaron heridos. Además, también se le asoció al ataque con retroexcavadoras y camiones de carga para derribar las cámaras de 14 puntos de vigilancia, así como tiroteos en Reynosa y bloqueos en las carreteras a Río Bravo y Monterrey, el pasado

20 de agosto. En esa ocasión, habitantes reportaron en redes sociales haber tratado de comunicarse con la GE sin que ésta acudiera al llamado. Mientras que el vocero de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, al ser cuestionado declaró: “pues es una gente que tiene sus formas y lo hacen muy rápido, no son improvisados, son gente que desafortunadamente lo hicieron con una planeación y, bueno, estamos ahora tomando unas acciones...”.

En redes sociales, se publicó un video de pocos segundos en donde elementos de la GE y civiles armados a bordo de una unidad blindada se enfrentan en la vía pública. Autoridades no declararon si esto ocurrió durante la aprehensión de “El M40” o se trata de una agresión posterior, ya que algunos medios informaron que fue una represalia por parte de Los Metros ante la detención de su líder. Fuentes oficiales sólo confirmaron que un elemento de la GE murió y otro quedó gravemente lesionado.

Los vacíos de información por parte de las autoridades del estado provocaron que se esparcieran rumores a través de redes sociales. Uno fue que los dos elementos de la GE agredidos acababan de ser reubicados de Camargo a Reynosa, supuestamente por haber hecho referencia a la corrupción que existía en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. (Camargo es uno de los municipios que se encuentra en la llamada “Frontera Chica”, donde hay alta actividad criminal, pero poca información por parte tanto de autoridades como de medios de comunicación). Sumado a lo anterior, nuevamente circularon testimonios sobre la supuesta falta de recursos con la que trabajan los elementos de seguridad en el estado, incluida la falta de gasolina en unidades para labores de vigilancia, incluso para tratar de resguardarse en caso de una agresión armada.

A pesar de que se concretan detenciones de supuestos líderes del crimen organizado, la falta de una estrategia integral por parte del gobierno estatal continúa generando desconfianza por parte de la población. Hasta el momento, las aprehensiones no logran disminuir el grado de violencia en la frontera tamaulipeca. El pasado 7 de septiembre, se capturó a Roque Cruz Fuentes (a) “El M-58”, también supuesto jefe criminal de la facción de Los Metros en Reynosa junto a otras ocho personas que supuestamente eran sus escoltas, pero las actividades criminales continuaron y la percepción de inseguridad de los habitantes continúa en altos niveles.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2023, indica que en Reynosa la percepción de inseguridad subió de 72.7% en el trimestre anterior, a 84.4%, mientras que en municipios como Nuevo Laredo se incrementó de 54.8% a 73.4%. La detención de “El M40”, quien ni siquiera cuenta con una orden de aprehensión a pesar de los delitos con los que se le relaciona, y del “Jefe Toto” no menguará la violencia en el corto y mediano plazos, pues la falta del líder de un grupo es rápidamente remediada con el ascenso de otro miembro o reclutamiento de elemento nuevo, especialmente cuando los detenidos no parecen tener tanto peso en las organizaciones criminales como lo anuncian las autoridades. Apenas el 13 de octubre, la vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se registraron cinco bloqueos en la carretera Reynosa–San Fernando, con camiones de car-

ga pesada y transporte público, sin que se indicará quienes fueron los responsables ni se realizara detención alguna.



El 72.7% de la violencia vinculada al crimen organizado se concentra en 105 municipios. Las entidades con más del 35% de sus municipios ubicados entre los 100 más violentos son Baja California, Colima, Guanajuato y Quintana Roo

















ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

Lantia Intelligence presenta un análisis de los 100 municipios más violentos en lo que va del 2023 (enero a septiembre) con base a las cifras de víctimas letales del crimen organizado. Los principales hallazgos indican lo siguiente:






























- El 72.7% de la violencia vinculada al crimen organizado se concentra en 105 municipios, con un total de 10,305 víctimas letales (98 por municipio en promedio).
- El 22.9% de las víctimas se congrega en los primeros cinco lugares ocupados por municipios con por lo menos 300 víctimas: Tijuana (BC) con 1,219 víctimas, Juárez (CHIH) con 768, León (GTO) con 592, Acapulco (GRO) con 362, y Celaya (GTO) con 310.
- En el lugar 100 se encuentran seis municipios, en los cuales se concentra el 1.02% de la violencia y en total 144 víctimas (24 en cada municipio): Dolores Hidalgo (GTO), Pueblo Nuevo (GTO), Leonardo Bravo (GRO), La Paz (MEX), Xochitepec (MOR), y Tamuín (SLP).
- Los 100 municipios más violentos se encuentran ubicados en 24 entidades federativas, donde el 41.6% de las víctimas se concentró en tres entidades: Baja California con 1,423 víctimas (13.8%) identificadas en cinco municipios, Chihuahua con 1,113 víctimas (10.8%) registradas en tres municipios, y Guanajuato con 1,747 víctimas (17.0%) detectadas en 17 municipios.
- A continuación, se presentan las siete entidades donde más del 85% de la violencia que han registrado fue en municipios que están dentro de los 100 más violentos (se indica la entidad, el porcentaje de sus municipios que se encuentra entre los más violentos, y el porcentaje de la violencia del estado concentrada en dichos municipios):
 - Baja California, el 100.0% de sus municipios y, por tanto, el 100% de las víctimas.
 - Sonora, el 8.3% de sus municipios, con 91.5% de las víctimas.
 - Chihuahua, el 4.5% de sus municipios, con el 90.6% de la violencia.
 - Colima, con el 40.0% de sus municipios y el 90.3% de las víctimas.
 - Guanajuato, con el 37.0% de sus municipios y el 89.6% de la violencia.
 - Quintana Roo, el 36.4% de sus municipios y con el 88.5% de las víctimas.
 - Jalisco, con el 4.0% y el 86.4% de la violencia.

- Los estados con la menor proporción de sus municipios ubicados dentro de los 100 más violentos y que dichos municipios concentran menos del 30.0% de víctimas del total registrado en la entidad son: Puebla (0.5% de sus municipios con el 27.9% de las víctimas), Veracruz (1.4% de sus municipios con el 26.5% de víctimas), Tabasco (5.9% de sus municipios y con el 23.2% de víctimas), e Hidalgo (1.2% de sus municipios y con el 13.7% de víctimas).
- Son ocho entidades, cuyos municipios no se encuentran dentro de los 100 más violentos (en dichas entidades se han registrado un total de 637 víctimas a lo largo de 2023 y en total suman 948 municipios): Baja California Sur (24 víctimas), Campeche (33), Chiapas (145), Coahuila (12), Durango (31), Oaxaca (306), Tlaxcala (77), y Yucatán (9).































100 Municipios con más VLCO (enero a septiembre de 2023)

Estado	Municipio	Total	Jerarquía	%	% Acumulado	Tendencia Mensual
Baja California	Tijuana	1,219	1	8.60%	8.60%	
Chihuahua	Juárez	768	2	5.42%	14.02%	
Guanajuato	León	592	3	4.18%	18.20%	
Guerrero	Acapulco	362	4	2.55%	20.75%	
Guanajuato	Celaya	310	5	2.19%	22.94%	
Sinaloa	Culiacán	287	6	2.02%	24.96%	
Chihuahua	Chihuahua	273	7	1.93%	26.89%	
Quintana Roo	Benito Juárez	253	8	1.78%	28.67%	
Sonora	Cajeme	253	8	1.78%	30.46%	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	241	10	1.70%	32.16%	
Michoacán	Morelia	192	11	1.35%	33.51%	
Colima	Colima	172	12	1.21%	34.73%	
Guanajuato	Salamanca	163	13	1.15%	35.88%	
Colima	Tecomán	157	14	1.11%	36.98%	
Guanajuato	Irapuato	154	15	1.09%	38.07%	
Michoacán	Uruapan	151	16	1.07%	39.14%	































100 Municipios con más VLCO (enero a septiembre de 2023)

Estado	Municipio	Total	Jerarquía	%	% Acumulado	Tendencia Mensual
Sonora	Guaymas	149	17	1.05%	40.19%	
Morelos	Cuernavaca	148	18	1.04%	41.23%	
Zacatecas	Guadalupe	144	19	1.02%	42.25%	
Michoacán	Zamora	128	20	0.90%	43.15%	
Zacatecas	Fresnillo	127	21	0.90%	44.05%	
Sonora	San Luis Río Colorado	116	22	0.82%	44.86%	
Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	110	23	0.78%	45.64%	
Colima	Villa de Álvarez	102	24	0.72%	46.36%	
Jalisco	Tlaquepaque	102	24	0.72%	47.08%	
Jalisco	Zapopan	97	26	0.68%	47.76%	
Guerrero	Iguala de la Independencia	96	27	0.68%	48.44%	
Baja California	Ensenada	92	28	0.65%	49.09%	
Colima	Manzanillo	92	28	0.65%	49.74%	
Nuevo León	Juárez	84	30	0.59%	50.33%	
Puebla	Puebla	84	30	0.59%	50.92%	
San Luis Potosí	San Luis Potosí	84	30	0.59%	51.52%	
Guanajuato	Salvatierra	82	33	0.58%	52.10%	
Tamaulipas	Reynosa	80	34	0.56%	52.66%	
Zacatecas	Zacatecas	79	35	0.56%	53.22%	
Nuevo León	Monterrey	77	36	0.54%	53.76%	
Jalisco	Guadalajara	73	37	0.52%	54.28%	
Chihuahua	Cuauhtémoc	72	38	0.51%	54.78%	
Guanajuato	Valle de Santiago	69	39	0.49%	55.27%	
Nuevo León	Guadalupe	69	39	0.49%	55.76%	
Quintana Roo	Tulum	66	41	0.47%	56.22%	
Morelos	Cuatla	64	42	0.45%	56.67%	
Morelos	Yautepec	64	42	0.45%	57.13%	
Morelos	Temixco	63	44	0.44%	57.57%	
Morelos	Jiutepec	60	45	0.42%	57.99%	

100 Municipios con más VLCO (enero a septiembre de 2023)

Estado	Municipio	Total	Jerarquía	%	% Acumulado	Tendencia Mensual
Quintana Roo	Solidaridad	58	46	0.41%	58.40%	
Guanajuato	Apaseo el Grande	57	47	0.40%	58.80%	
México	Ecatepec de Morelos	56	48	0.40%	59.20%	
Michoacán	Apatzingán	54	49	0.38%	59.58%	
Sonora	Hermosillo	54	49	0.38%	59.96%	
Morlos	Emiliano Zapata	53	51	0.37%	60.34%	
Veracruz	Poza Rica de Hidalgo	53	51	0.37%	60.71%	
Zacatecas	Jerez	51	53	0.36%	61.07%	
Guanajuato	Pénjamo	50	54	0.35%	61.42%	
Michoacán	Jacona	50	54	0.35%	61.78%	
Michoacán	Tacámbaro	49	56	0.35%	62.12%	
Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	47	57	0.33%	62.45%	
Baja California	Tecate	46	58	0.32%	62.78%	
CDMX	Gustavo A. Madero	44	59	0.31%	63.09%	
Nuevo León	García	43	60	0.30%	63.39%	
Nuevo León	Apodaca	41	61	0.29%	63.68%	
Baja California	Mexicali	39	62	0.28%	63.96%	
Sinaloa	Mazatlán	39	62	0.28%	64.23%	
CDMX	Iztapalapa	38	64	0.27%	64.50%	
Zacatecas	Calera	38	64	0.27%	64.77%	
Nuevo León	Santa Catarina	36	66	0.25%	65.02%	
Guanajuato	Purísima del Rincón	35	67	0.25%	65.27%	
Morlos	Jojutla	35	67	0.25%	65.51%	
Veracruz	Córdoba	35	67	0.25%	65.76%	
Nuevo León	Gral. Escobedo	33	70	0.23%	65.99%	
Tabasco	Huimanguillo	32	71	0.23%	66.22%	
Guanajuato	San Miguel de Allende	31	72	0.22%	66.44%	
CDMX	Cuauhtémoc	30	73	0.21%	66.65%	
Morelos	Tlaltizapán	30	73	0.21%	66.86%	
Nayarit	Tepic	30	73	0.21%	67.07%	

100 Municipios con más VLCO (enero a septiembre de 2023)

Estado	Municipio	Total	Jerarquía	%	% Acumulado	Tendencia Mensual
Quintana Roo	Othón P. Blanco	30	73	0.21%	67.29%	
Guanajuato	Tarimoro	29	77	0.20%	67.49%	
Guerrero	Juan R. Escudero	29	77	0.20%	67.69%	
México	Tlalnepantla de Baz	29	77	0.20%	67.90%	
Querétaro	Querétaro	29	77	0.20%	68.10%	
San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	29	77	0.20%	68.31%	
Sonora	Nogales	29	77	0.20%	68.51%	
Guanajuato	Silao	28	83	0.20%	68.71%	
México	Nezahualcóyotl	28	83	0.20%	68.91%	
México	Tenango del Valle	28	83	0.20%	69.11%	
Nuevo León	Salinas Victoria	28	83	0.20%	69.30%	
Baja California	Playas de Rosarito	27	87	0.19%	69.49%	
Guanajuato	San Francisco del Rincón	27	87	0.19%	69.68%	
Jalisco	Tonalá	27	87	0.19%	69.87%	
Nuevo León	San Nicolás de los Garza	27	87	0.19%	70.06%	
Sinaloa	Angostura	27	87	0.19%	70.26%	
Sonora	Caborca	27	87	0.19%	70.45%	
Michoacán	Tarímbaro	26	93	0.18%	70.63%	
Aguascalientes	Aguascalientes	25	94	0.18%	70.81%	
Guanajuato	San Luis de la Paz	25	94	0.18%	70.98%	
Guerrero	José Azueta	25	94	0.18%	71.16%	
Hidalgo	Tula de Allende	25	94	0.18%	71.33%	
Michoacán	Hidalgo	25	94	0.18%	71.51%	
Veracruz	Coatzacoalcas	25	94	0.18%	71.69%	
Guanajuato	Dolores Hidalgo	24	100	0.17%	71.86%	
Guanajuato	Pueblo Nuevo	24	100	0.17%	72.03%	
Guerrero	Leonardo Bravo	24	100	0.17%	72.20%	
México	La Paz	24	100	0.17%	72.36%	
Morelos	Xochitepec	24	100	0.17%	72.53%	
San Luis Potosí	Tamuín	24	100	0.17%	72.70%	

Fuente: Lantia Intelligence, 2023.